

XIII. FORMACION E INTEGRACION DE LA RED FEDERAL DE CONTROL DE LA INVERSION SOCIAL

Uno de los asuntos que de modo más tangible y concreto preocupa a la sociedad en materia de uso de los recursos públicos, lo constituye el problema del gasto social, que implica un muy significativo porcentaje del total de la inversión prevista en el presupuesto nacional (8 mil millones) y en los de las provincias y municipalidades.

No se discute que el presupuesto del Estado debe servir a la inclusión social, lo que se pone en duda es la eficiencia del uso de los recursos públicos en la materia.

De allí la trascendencia que tiene el integrar, paralelamente a la red de contención social formada por programas tales como el Plan Jefes y Jefas de Hogar, Emergencia Alimentaria, Trabajar, etc., un sistema integrado de controles por parte de los organismos competentes, mediante el que se fiscalice el recurso desde su generación en el Estado Nacional hasta su inversión definitiva, tanto por parte de la Provincia como de las Municipalidades.

En razón de existir en la Argentina una organización federal, en la que cada uno de los niveles del Estado tiene sus propios órganos de control, a veces no coincidentes entre sí, la coordinación no suele resultar una tarea sencilla.

El Convenio que celebran la Sindicatura General de la Nación (órgano del control interno del Estado Nacional) con el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza (órgano de control externo de la provincia y las municipalidades mendocinas) tiene por objeto dar integralidad y coherencia al sistema.

Así como el gasto social se prodiga en redes destinadas a vitalizar los sectores más excluidos de la sociedad, su control también debe abrazar en red para llegar a todos los puntos en que la inversión se concreta.

Por eso debe ponderarse como un logro importante el poner de acuerdo los distintos niveles del control, para permitir un seguimiento de la inversión de los recursos, desde el momento en que se generan hasta el momento en que se produce su inversión definitiva.

Controlar el gasto social es una función ineludible e irrenunciable del Estado, ya que sólo el Estado posee los mecanismos legales y técnicos, infraestructura e información que lo hacen posible. El Estado debe cuidar el uso de sus recursos con toda

la energía que se precisa y en todos los niveles del gasto, sin perjuicio de la colaboración que en la gestión de control puedan realizar los propios interesados mediante las organizaciones que los vinculan. De esa manera debe procurar la efectiva realización del bien común con los fondos que se obtienen con el esfuerzo del conjunto de la sociedad.



El Gobernador Ing. Julio César Cobos acompaña a los integrantes del Tribunal Dr. Salvador C. Farruggia (Presidente) y Dres. Roberto J. Ros, Mario F. Angelini, Francisco J. Barbazza y Alberto Zeballos (Vocales), junto al ex Síndico General de la Nación Lic. Miguel A. Pesce. Además formaron la mesa académica el Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.C. Cont. Alberto Anta y el Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires Cont. Miguel Teilletchea